

IRLANDA

Mercedes Vidal Gallardo¹

Fernando Santamaría Lambás²

Universidad de Valladolid

1. STATUTORY INSTRUMENT S.I. NO 657 OF 2006³ ORDER 2006 (NO.2) INMIGRACIÓN ACT 2004⁴

Esta Orden, dictada en diciembre de 2006, viene a desarrollar el contenido de la Ley de Inmigración de 2004 y especifica que clases de ciudadanos no-nacionales están exentos del requisito legal de hallarse en posesión del visado irlandés y aquellos a los que se les exige un visado válido de tránsito cuando circulen dentro de los límites que marcan los puertos del Estado.

La principal novedad que introduce esta Orden es que los nacionales de Bulgaria y Rumania, desde la fecha en que sus respectivos países accedieron como miembros a la Unión

¹ La Profesora Vidal Gallardo ha recopilado la parte relativa al STATUTORY INSTRUMENT S.I. No 657 of 2006, CRIMINAL JUSTICE (TERRORIST OFFENCES) ACT 2005, y el STATUTORY INSTRUMENT S.I. No. 657 of 2006 Immigration Act 2004 (Visas) (No. 2) Order 2006.

² El Profesor Fernando Santamaría Lambas ha realizado la parte relativa a la Ley de Personas con discapacidad de 2005, (*Disability Act 2005*).

³ Publicada por el Stationery Office, Dublin, con fecha de 18 de diciembre de 2006.

⁴ Se trata de una norma reglamentaria, que tiene la consideración de Orden, por la que se modifica en algunos extremos la Ley de Inmigración de 2004. Su entrada en vigor ha tenido lugar el 1 de enero de 2007 y deroga la Orden de 2006 (S.I. No. 227 de 2006), Statutory Instrument. (Visas) Order 2006, The Immigration Act 2004.

Europea, no estas sujetos al trámite del visado irlandés requerido para otros no nacionales de este Estado. La norma también dispone que quienes se encuentren en posesión de los documentos aprobados por la Convención de Ginebra de 1951, relativos al estatuto de refugiado y emitidos por algunos Estados, no precisarán del visado irlandés al que nos hemos referido anteriormente, pero sólo en el caso de que vayan a permanecer en el país como máximo durante un período de tres meses.

En esta disposición, cuando se utiliza la expresión “*Convention travel document*”, el término hace referencia a los documentos emitidos de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Convención de Ginebra⁵ y se entiende que esta Convención debe ser interpretada en los términos previstos en la Ley de Refugiados aprobada por Irlanda en 1996⁶. Asimismo se prevé que la tarjeta de residencia permanente o de simple residencia, se acomode a lo establecido a las Reglas adoptadas en 2006 en relación con la libre circulación de personas en el ámbito de las Comunidades Europeas⁷.

⁵ Este precepto establece, en relación a los documentos de viaje, los siguientes términos:

1. Los Estados Contratantes expedirán, a los refugiados que se encuentren legalmente en su territorio, documentos de viaje que les permitan trasladarse fuera del mismo, a menos que se oponga a ello razones imperiosas de seguridad nacional. Las disposiciones del Anexo de esta Convención se aplicarán a esos documentos. Los Estados Contratantes podrán expedir dichos documentos de viaje a cualquier otro refugiado que se encuentre en su territorio y tratarán con benevolencia a los refugiados que, residiendo en tales Estados, no puedan obtener un documento de viaje del país en que se encuentren legalmente.

2. Los documentos de viaje expedidos a los refugiados por parte de los Estados que han suscrito acuerdos internacionales previos, serán reconocidos por los Estados Contratantes y considerados de igual forma que si hubieran sido expedidos con arreglo al presente artículo.

⁶ No 17. 1996.

⁷ Statutory Instrument. S.I. No. 656 of 2006. European Communities (Free Movement of Persons). (No. 2) Regulations 2006. Su entrada en vigor también ha tenido lugar el 1 de enero de 2007.

De forma sistemática, en esta Orden, que ha entrado en vigor el 1 de enero de 2007, se hace referencia a la siguiente clasificación de ciudadanos que no necesitan encontrarse en posesión de un visado válido irlandés cuando llegan a este Estado y que son los que siguen a continuación:

1).- nacionales de un Estado a los que se refiere el cuadro 1.

2).- no-nacionales que se encuentren en posesión de alguno de los siguientes documentos:

a).- un documento de viaje válido emitido de conformidad a lo establecido por la Convención de Ginebra y expedido por alguno de los siguientes países: Bélgica, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Islandia, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, República Eslovaca, España, Suecia y Suiza, siempre que el portador de este documento viaje a Irlanda con la intención de no permanecer durante más de tres meses en el Estado.

b).- una tarjeta válida de residencia permanente, emitida de acuerdo con lo establecido en la Regla 16 de las Reglas sobre libre circulación de personas adoptadas en 2006.⁸

⁸ Esta Regla 16, bajo la rúbrica de “Expedición de tarjeta de residencia permanente para el miembro de una familia que no es nacional de un Estado miembro” dispone lo siguiente:

1).- En virtud de lo establecido en estas Reglas, se concede al miembro de una familia de un ciudadano de la Unión, que no es nacional de un Estado miembro, el derecho a permanecer de manera estable en el Estado después de que haya expirado la fecha de su tarjeta de residencia, solicitando al Ministro una tarjeta de residencia permanente. (...)

3).- Cuando el Ministro ha autorizado al miembro de la familia a que se refiere el párrafo 1.a) a permanecer en el Estado de forma estable, tan pronto como le sea posible, pero no después de los seis meses siguientes a la fecha de vencimiento de la tarjeta, el interesado podrá solicitar una nueva tarjeta de residencia permanente que contendrá las particularidades de esta estancia a las que se refiere el apartado 7.

4).- La tarjeta permanente de residencia tendrá una validez de 10 años y deberá ser renovada trascurrido este período.

c).- una tarjeta válida de residencia emitida conforme a la Regla 6 de las Reglas sobre libre circulación de personas adoptadas en 2006⁹.

De la misma forma, en esta Orden se establecen (cuadro 2) las clases de ciudadanos no nacionales a los que se les exige estar en posesión de un visado válido de tránsito, cuando lleguen a un puerto del Estado irlandés con la intención de pasar a través de este puerto a otro, o bien de viajar a otro Estado.

CUADRO 1

Clases de ciudadanos no nacionales que no necesitan encontrarse en posesión de un visado válido irlandés cuando llegan a este Estado

Andorra	Guatemala	Polonia
Antigua Barbuda	Guyana	Portugal
Argentina	Honduras	Rumania

5).- La validez de la tarjeta permanente de residencia no se verá afectada por la ausencia del Estado por parte del poseedor de la misma durante un período continuado de al menos dos años.

⁹ La Regla 7 de estas estipulaciones establece, bajo el título “*Registro de los miembros de una familia de un ciudadano de la Unión que no son nacionales de un Estado miembro*”, los siguientes extremos:

1.a).- El familiar miembro de un ciudadano de la Unión que no es nacional de un Estado miembro y que haya estado residiendo en el Estado al menos durante tres meses, podrá solicitar al Ministerio una tarjeta de residencia.

1.b).- Para la solicitud de la tarjeta a que se refiere el apartado anterior, el interesado deberá aportar la documentación necesaria que justifique su concesión, de conformidad con lo establecido en el apartado 2.

1.c).- El Ministerio deberá enviar acuse de recibo al interesado de haber recibido la solicitud de la tarjeta a que se refiere el apartado anterior.

2.- En el plazo de seis meses desde la percepción del acuse de recibo a que se refiere el apartado anterior, el interesado deberá recibir una tarjeta de residencia en la que se contengan las particularidades que afectan al miembro de la familia de que se trate.

3.- De acuerdo con la Regla 20, las personas obligadas a efectuar la solicitud prevista en el apartado 1.a), podrán permanecer en el Estado durante el tiempo en que se resuelva su solicitud.

CRÓNICA LEGISLATIVA DE IRLANDA

Australia	Hong Kong	Saint Kitts & Nevis
Austria	Hungría	Santa Lucía
Las Bahamas	Islandia	San Vicente
Barbados	Israel	Samoa
Bélgica	Italia	San Marino
Belize	Japón	Seychelles
Bolivia	Kiribati	Singapore
Botsuana	Letonia	República Eslovaca
Brazil	Lesotho	Eslovenia
Brunei	Liechtenstein	Islas Salomon
Bulgaria	Lituania	Sudáfrica
Canadá	Luxemburgo	Corea del Sur
Chile	Macau	España
Costa Rica	Malawi	Suacilandia
Croacia	Malasia	Suecia
Chipre	Maldivas	Suiza
República Checa	Malta	Tonga
Dinamarca	Trinidad	Tobago
Rep. Dominicana	México	Tuvalu
El Salvador	Mónaco	Colonias del R. Unido
Estonia	Nauru	EE UU de América
Islas Fiji	Holanda	Uruguay
Finlandia	Nueva Zelanda	Vanauta
Francia	Nicaragua	Ciudad del Vaticano
Alemania	Noruega	Venezuela
Grecia	Panamá	Paraguay

CUADRO 2

Clases de ciudadanos no nacionales a los se les exige estar en posesión de un visado de tránsito válido cuando llegan a un puerto de este Estado para pasar a través de él a otro o bien para viajar a otro Estado.

Afganistán	Líbano	Albania
Moldavia	Cuba	Montenegro
Congo	Nigeria	Eritrea
Serbia	Etiopía	Somalia
Ghana	Sri Lanka	Iran
Zimbabwe	Irak	

2. CRIMINAL JUSTICE (TERRORIST OFFENCES) ACT 2005.¹⁰

La finalidad pretendida por esta Ley es conceder efecto a ciertos instrumentos internacionales dirigidos a paliar el terrorismo y a cumplir los compromisos que el Estado Irlandés asumió en su condición de parte de la Unión Europea y miembro de la Comunidad Internacional, incluido el compromiso derivado de la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Resolución adoptada en respuesta a los acontecimientos que tuvieron lugar el 11 de septiembre de 2001.

Las principales normas a las que esta disposición quiere otorgar efectos, son las siguientes:

Decisiones de la Unión Europea para combatir el terrorismo.

Convención Internacional sobre las fianzas de los secuestrados.

¹⁰ Number 2 of 2005 [8th March, 2005]

Convención sobre la prevención y penalización de los crímenes cometidos contra personas que gozan de protección internacional, incluidos los agentes diplomáticos.

Convención Internacional para la supresión de los bombardeos terroristas.

Convención Internacional para la supresión de la financiación del terrorismo.

En este contexto, fundamentalmente hay tres preceptos de esta Ley en los que, de una manera más o menos directa, se aborda la adopción de ciertas medidas relacionadas con la extradición de personas que hayan cometido actos terroristas. Se trata de medidas absolutamente desvinculadas de cualquier consideración de carácter étnico, religioso, nacional o político, evitando así cualquier atisbo de discriminación y, en cualquier caso, garantizando el pleno ejercicio de los derechos fundamentales.

En este sentido, es significativo poner de manifiesto lo establecido en el artículo 9, en cuya virtud:

Artículo 9.1.- *“Conforme a esta Convención, el permiso de extradición de un delincuente no será concedido cuando haya argumentos sustanciales para creer que:*

a).- el permiso de extradición tramitado con motivo de haber cometido alguno de los atentados a los que se refiere el primero de los artículos de esta Ley, se ha solicitado con la finalidad de procesar o castigar a una persona a causa de su raza, religión, nacionalidad, origen étnico u opinión política.

b).- la posición de la persona se puede ver gravemente perjudicada por alguno de los siguientes motivos:

i).- por cualquiera de las razones apuntadas en el apartado a).

ii).- porque la comunicación con las autoridades competentes del Estado que solicita la extradición, no garantiza

la protección en el ejercicio de los derechos de la persona cuya extradición se solicita.

En la misma línea de razonamiento, se expresa el artículo 12 de la Ley, cuyo contenido reproduce, prácticamente en su integridad, el contenido del artículo 15. Según estas disposiciones:

“Ninguno de los preceptos de esta Ley se interpretará como una imposición de la obligación de extradición o de ayuda mutua legal si se deduce, de la solicitud de extradición por parte del Estado interesado en que ésta tenga lugar, que hay substanciales razones para creer que ésta tiene como finalidad procesar o castigar a una persona debido a su raza, religión, nacionalidad, origen étnico u opinión política, incluso aunque haya cometido las ofensas a las que se refiere el artículo 2 de esta Ley. También se elimina esta obligación de conceder la extradición cuando su concesión pueda perjudicar a la posición de la persona en cuestión por cualquiera de las razones apuntadas”.

3. STATUTORY INSTRUMENT S.I. No. 657 OF 2006 IMMIGRATION ACT 2004 (VISAS) (No. 2) ORDER 2006

I. Michael McDowell, Minister for Justice, Equality and Law Reform, in exercise of the powers conferred on me by section 17 of the Immigration Act 2004 (No. 1 of 2004), hereby order as follows:

1. (1) This Order may be cited as the Immigration Act 2004 (Visas) (No. 2) Order 2006.

(2) This Order comes into operation on 1 January 2007.

2. In this Order -

“Convention travel document” means a travel document issued in accordance with Article 28 of the Geneva Convention;

“Geneva Convention” has the meaning assigned to it by the Refugee Act 1996 (No. 17 of 1996);

“permanent residence card” has the meaning assigned to it by the Regulations of 2006;

“residence card” has the meaning assigned to it by the Regulations of 2006;

“Regulations of 2006” means the European Communities (Free Movement of Persons) (No. 2) Regulations 2006 (S.I. No. 656 of 2006).

3. It is hereby declared that the following classes of non-nationals are specified as classes, the members of which are not required to be in possession of a valid Irish visa when landing in the State:

(a) nationals of a state specified in Schedule 1;

(b) non-nationals who are holders of

(i) a valid Convention travel document issued by Belgium, Czech Republic, Denmark, Finland, Germany, Iceland, Italy, Liechtenstein, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovak Republic, Spain, Sweden, or Switzerland and where the intended purpose of the travel to the State by the holder of such a travel document is solely for a visit of up to a maximum period of 3 months,

(ii) a valid permanent residence card issued under Regulation 16 of the Regulations of 2006, or

(iii) a valid residence card issued under Regulation 7 of the Regulations of 2006.

4. It is hereby declared that the classes of non-nationals specified in Schedule 2 are specified as classes, the members of which are required to be in possession of a valid Irish transit visa when arriving at a port in the State for purposes of passing through the port in order to travel to another state.

5. The Immigration Act 2004 (Visas) Order 2006 (S.I. No. 227 of 2006) is revoked.

Article 3.

SCHEDULE 1

Classes of non-nationals not required to be in possession of a valid Irish visa when landing in the State

Andorra Guatemala Poland
Antigua & Barbuda Guyana Portugal
Argentina Honduras Romania
Australia Hong Kong (Special Administrative Region)
Saint Kitts & Nevis
Austria Hungary Saint Lucia
The Bahamas Iceland Saint Vincent & the Grenadines
Barbados Israel Samoa
Belgium Italy San Marino
Belize Japan Seychelles
Bolivia Kiribati Singapore
Botswana Latvia Slovak Republic
Brazil Lesotho Slovenia
Brunei Liechtenstein Solomon Islands
Bulgaria Lithuania South Africa
Canada Luxembourg South Korea
Chile Macau (Special Administrative Region) Spain
Costa Rica Malawi Swaziland
Croatia Malaysia Sweden
Cyprus Maldives Switzerland
Czech Republic Malta Tonga
Denmark Mauritius Trinidad & Tobago
Dominica Mexico Tuvalu

El Salvador Monaco United Kingdom & Colonies
Estonia Nauru United States of America
Fiji Netherlands Uruguay
Finland New Zealand Vanuatu
France Nicaragua Vatican City
Germany Norway Venezuela
Greece Panama
Grenada Paraguay

Article 4.

SCHEDULE 2

Classes of non-nationals required to be in possession of a valid Irish transit visa when arriving at a port in the State for purposes of passing through the port in order to travel to another state

Afghanistan Lebanon
Albania Moldova
Cuba Montenegro
Democratic Republic of the Congo Nigeria
Eritrea Serbia
Ethiopia Somalia
Ghana Sri Lanka
Iran Zimbabwe
Iraq

GIVEN under my Official Seal,

18 December 2006

Minister for Justice, Equality and Law Reform.

Explanatory Note

(This note is not part of the Instrument and does not purport to be a legal interpretation.)

This Order specifies the classes of non-nationals who are exempt from Irish visa requirements and those who are required to be in possession of a valid Irish transit visa when transiting within a port within the State. The principal change effected by the Order is that nationals of Bulgaria and Romania are from the date of accession of those countries to the EU, no longer subject to an Irish visa requirement. The Order also specifies that holders of travel documents under the 1951 Geneva Convention relating to the Status of Refugees issued by certain states are not required to hold an Irish visa when visiting the State for periods of 3 months or less.

4. NUMBER 2 OF 2005 (8TH MARCH, 2005). CRIMINAL JUSTICE (TERRORIST OFFENCES) ACT 2005.

(...)

Article 9

1. A request for the extradition of an alleged offender, pursuant to this Convention, shall not be granted if the requested State Party has substantial grounds for believing:

(a) That the request for extradition for an offence set forth in article 1 has been made for the purpose of prosecuting or punishing a person on account of his race, religion, nationality, ethnic origin or political opinion; or

(b) That the person's position may be prejudiced:

(i) for any of the reasons mentioned in subparagraph (a) of this paragraph, or

(ii) for the reason that communication with him by the appropriate authorities of the State entitled to exercise rights of protection cannot be effected.

2. With respect to the offences as defined in this Convention, the provisions of all extradition treaties and arrangements applicable between States Parties are modified as between States Parties to the extent that they are incompatible with this Convention.

(...)

Article 12

Nothing in this Convention shall be interpreted as imposing an obligation to extradite or to afford mutual legal assistance, if the requested State Party has substantial grounds for believing that the request for extradition for offences set forth in article 2 or for mutual legal assistance with respect to such offences has been made for the purpose of prosecuting or punishing a person on account of that person's race, religion, nationality, ethnic origin or political opinion or that compliance with the request would cause prejudice to that person's position for any of these reasons.

(...)

Article 15

Nothing in this Convention shall be interpreted as imposing an obligation to extradite or to afford mutual legal assistance, if the requested State Party has substantial grounds for believing that the request for extradition for offences set forth in article 2 or for mutual legal assistance with respect to such offences has been made for the purpose of prosecuting or punishing a person on account of that person's race, religion, nationality, ethnic origin or political opinion or that compliance with the request would cause prejudice to that person's position for any of these reasons.

5. LEY DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE 2005 (*DISABILITY ACT 2005*).

La ley de personas con discapacidad de 2005 (*Disability Act 2005*) de Irlanda contiene siete partes: la primera (preliminar y general), la segunda (gravamen de la necesidad, de las

declaraciones del servicio y de la compensación), la tercera (acceso a los edificios, los servicios y los planes sectoriales), al cuarta (pruebas genéticas), la quinta (empleo del servicio público), al sexta (centro para la excelencia en diseño universal) y la séptima (misceláneo).

A reserva de *la subsección (3)*, esta ley, salvo cuando se trate de una disposición para la que se señale en esta ley una entrada en vigor en fecha diferente, entrará en funcionamiento el día o los días que se fijen, por orden u órdenes dadas por el Ministro, pudiendo señalarse fechas diferentes en función de las diferentes proposiciones.

Se trata de una ley que pretende se sepan las necesidades de educación y de salud de las personas con discapacidad, para que los miembros del gobierno prevean las asignaciones posibles de acuerdo con los recursos de que se disponen.

Centremos nuestro interés en las partes 1y 4, la primera dedicada a preliminares y general y la segunda a las pruebas genéticas.

La parte primera de la ley de personas con discapacidad de 2005 (*Disability Act 2005*) está dedica a preliminar y general. Consta de seis secciones, dedicadas a: la primera (título y comienzo cortos), la segunda (interpretación), al tercera (órdenes y regulaciones), la cuarta (costos), al quinta (disposición de recursos y grado y compensación) y la sexta (revisión de la operación de la ley).

La sección primera (preliminar y general) establece que esta ley se puede citar como *Disabilty Act 2005* (Ley de personas con discapacidad de 2005), deberá fijar con carácter general o referente a una disposición particular, y se fijarán días diferentes para diversos propósitos y diversas provisiones. Aunque se establece una excepción que es en lo referente a una disposición cuyo comienzo esté previsto de otra manera por esta ley

La parte 2 entrará en la operación en los días previstos por la orden u ordenes dadas por el Ministro para la salud y la juventud, cuando sea apropiado, tras la consulta con el Ministro de educación y ciencia, se deberán fijar diversos días en función de las personas y de sus edades, y días diferentes para diversos propósitos y para diversas provisiones.

En esta ley, salvo donde el contexto lo requiera, “*Act of 1999*” quiere decir *Nacional Disability Authority Act 1999* (Ley de la Autoridad nacional de la Discapacidad de 1999); “*Defence Forces*” tiene el significado asignado por *The Defence Act 1954* (Ley de Defensa de 1954).

“Discapacidad” en relación a una persona, significa una restricción substancial en la capacidad de la persona para ejercer una profesión, un negocio o una ocupación en el Estado o de participar en vida social o cultural en el Estado por causa de una salud física, sensorial, mental o de la debilitación intelectual.

“Ejecutivo” significa el Servicio de salud médico ejecutivo.

“Funciones” incluye las atribuciones y obligaciones y las referencias al desempeño de las funciones incluyen, en lo que respecta a las facultades y la realización de las tareas.

“Jefe” en lo referente a los medios de un cuerpo público, la persona que sostiene, o realiza las funciones de la oficina del cuadro superior (por lo que es conocido) del cuerpo.

“Autoridad local” tiene el significado que le asigna la Ley de gobierno local de 2001.

“Ministro” significa Ministro para la reforma de la justicia, de la igualdad y de la ley.

“Servicio de transporte del pasajero” no incluye un servicio aéreo en el sentido de la Navegación Aérea y la ley de 1965 de la navegación y del transporte o de un servicio prestado por una persona que sólo cuenta con un servicio de tren o infraestructuras ferroviarias de interés histórico o turístico.

"Organismo público" significa: a) el Departamento de Estado, b) la oficina del Presidente, c) la Oficina del Fiscal General, d) la oficina del Interventor y del Auditor general, e) la Oficina de las Cámaras del Oireachtas (Parlamento), f) la autoridad local, g) el Ejecutivo, h) una persona, organismo u organización (con excepción de las Fuerzas de Defensa) establecidas, o en virtud de cualquier ley (con excepción de las leyes de Compañías 1963 a 2003), o bajo *Companies Acts de 1963 a 2003*, en cumplimiento de las facultades conferidas en virtud de otra ley, y financiados total o parcialmente, directa o indirectamente, a través de fondos prestados, o los prestamos concebidos o garantizados por un Ministro de de la Gobierno.

"Servicio" significa un servicio o instalación de cualquier tipo proporcionada por un organismo público que está disponible o accesible para el público en general o un sector del público y, sin perjuicio alguno para la generalidad anterior, incluye: a) la utilización de todos los lugares y actividades recreativas de propiedad, administrados o controlados por un organismo público, b) el suministro de información o de un régimen o de una pensión u otro beneficio administrado por un organismo público, c) cualquier patrimonio cultural o los servicios prestados por dicho organismo, y d) cualquier servicio prestado por un tribunal.

En esta ley, cualquier referencia a una parte de la sección o al cuadro es una referencia a la misma, a menos que expresamente se indique a que otra norma se refiere.

Cualquier referencia a una sección, párrafo o inciso es una referencia a la subsección, párrafo o inciso de la disposición en la que se produce a menos que la referencia se indique en relación con otra disposición.

Una referencia a cualquier ley o instrumento en virtud del estatuto es una referencia a esa promulgación o instrumento según las enmiendas efectuadas por cualquier ley o en virtud del estatuto.

El Ministro puede, con el consentimiento del ministro de Hacienda: a) prever por un Reglamento, con sujeción a las disposiciones de la presente ley, para cualquier materia mencionada en la parte 2 según lo prescrito, y b) además sobre cualquier otra facultad que le confería para formular reglamentos, con el fin de dar pleno efecto a la parte 2.

Cuando el Ministro propone la reglamentación de esta sección, antes de actuar consultará con los demás (si los hubiere) los costos y la disposición de los recursos con el Ministro del gobierno y con el ministro apropiado al asunto teniendo respeto a las funciones de ese otro Ministro del gobierno.

Una orden o reglamento en virtud de esta ley (que no sea un fin en la sección 1) puede contener provisiones fortuitas, suplementarias y en consecuencia, disposiciones que aparecen al Ministro del gobierno de que se trate que sea necesario o conveniente para los propósitos de la orden o del reglamento.

Cada orden (que no sea un fin en la sección 1) o el reglamento en virtud de esta ley se establecerán antes de llegar a cada una de las Cámaras del Parlamento (*Oireachtas*) tan pronto como pueda ser después de que se haga y, en caso de una resolución de anulación de la orden o reglamento aprobado por cualquiera de las Cámaras del Parlamento dentro de los próximos 21 días en que el Parlamento se haya reunido. La orden o reglamento se anula pero sin perjuicio de la validez de todo lo hecho anteriormente al respecto.

Un Ministro del gobierno por el que se da una orden en virtud de esta ley, podrá enmendar o revocar la orden.

En esta sección "Ministro" significa Ministro de Salud y de la Infancia.

Los gastos efectuados por un ministro del Gobierno (que no sea el Ministro de Hacienda) en la administración de esta ley, se pagarán con dinero que procede del Parlamento (*Oireachtas*).

Los gastos efectuados por el Ministro de Finanzas en la administración de esta ley se pagarán con cargo a los fondos proporcionados por el Parlamento (*Oireachtas*).

En esta sección "Ministro" significa un Ministro del gobierno.

"Organismo público", en relación con un ministro, significa un organismo público que presta sus servicios en virtud de esta ley en relación a la asignación económica efectuada por el Ministro.

"Plan de servicios", en relación con un determinado órgano, mediante un plan de servicios en virtud de la presente ley en relación con el cual asigna los fondos que el Ministro.

"Especificado organismo" se entiende el Poder Ejecutivo o cualquier otro organismo público que no ha sido objeto de una asignación por un Ministro en virtud de la subsección (2).

Cuando, en el ejercicio presupuestario de 2005 o de los años siguientes, un Ministro o un organismo público relevante en lo referente a lo que ese Ministro disponga o se encarga de la prestación de servicios bajo esta ley, que el Ministro, conforme a las subdivisiones (4) y (5), podrá asignar la cantidad de dinero que considere fuera del dinero disponible para ello, en función de lo que considere para la disposición de esos servicios.

Cuando, en el presupuesto del ejercicio 2005 o de los años siguientes, un cuerpo especificado prevea o establezca la disposición de servicios bajo esta ley, que el cuerpo, conforme a las subdivisiones (4) y (5), podrá asignar la cantidad de dinero que considere fuera del dinero disponible para ello, en función de lo que considere para la disposición de esos servicios.

Para determinar la asignación apropiada en virtud de la subsección (2) o (3) en un ejercicio presupuestario, el Ministro o el órgano de que se trate velará por que la cantidad restante después de la asignación no sea menor que la cantidad que es apropiada, teniendo en cuenta, entre otras cosas: a) la medida del

Ministro o del organismo especificado de las demás obligaciones en ese mismo año, y b) en el caso de un órgano, su plan del servicio para ese año, para el desempeño de las funciones que le confiere el Ministro o el órgano que no sea especificado en esta Ley.

Si está satisfecha que la cantidad de dinero asignada bajo la subdivisión (2) o (3) de un ejercicio presupuestario es la cantidad máxima permitida por esta sección para ser asignada: a) el Ministro o el órgano de que se trate especificado, según sea el caso, no estará obligado a asignar y nada de lo dispuesto en la presente ley se interpretará en el sentido de que se reciba la asignación de fondos adicionales en virtud de la subsección (2) o (3) por ese año, y b) el Ministro o un organismo público pertinente en lo referente al Ministro o determinado organismo, según sea el caso, no estará obligado a proporcionar, y no se interpretará nada en esta ley como requerir la disposición por o a nombre del ministro, del organismo público relevante o la entidad especificada de, los servicios en virtud de esta ley, en ese año el costo de la disposición de que no se podía ser satisfacer de los fondos asignados bajo la subsección (2) o (3).

El Ministro, a más tardar, 5 años después de la entrada en vigor de esta ley, realizará una revisión de la operatividad o funcionamiento de esta ley.

La parte 4ª de la ley de personas con discapacidad de 2005 (*Disability act 2005*) se refiere a las pruebas genéticas. Consta de las secciones 41 a 45. La sección 41 se refiere a cuestiones de interpretación, la 42 a las pruebas genéticas y procesos de datos genéticos, la 43 a la información sobre los antecedentes familiares, la 44 a la revisión de la operación de esta parte (en referencia a al parte 4ª) y la 45 al ahorrador.

Por lo que respecta a la prueba genética, a los efectos de la parte 4ª de la ley de minusvalía de 2005 cuando aparezca en la misma la expresión "*The acts*", es decir, "las leyes", hay que tener en cuenta que se está refiriendo a las leyes de protección de datos de 1988 y de 2003 (*the Data Protection Act 1988 and 2003*)

y que la expresión “datos genéticos” quiere decir datos referentes a una persona viva derivados de las pruebas genéticas realizadas a la persona.

Por tests o pruebas genéticas se entiende el examen de las muestras tomadas de una persona viva con el fin de analizar el ácido desoxirribonucleico o ribonucleico de la persona por medio de análisis cromosómico o por cualquier otro medio con uno de estos propósitos: a) confirmar la identidad o la naturaleza de la existencia de una enfermedad sintomática, b) determinar si la persona tiene un predisposición o una susceptibilidad genética a una enfermedad, o c) la identificación de la portadora de una enfermedad.

"Procesamiento" tiene el significado que se le asigne en las leyes.

Las pruebas genéticas no se llevarán a cabo en una persona a menos que, o bien la prueba no esté prohibida por la ley, o exista consentimiento de la persona para someterse al tratamiento de los datos genéticos que se derivarán de la prueba se ha obtenido de acuerdo con las leyes.

Ninguna persona participará en el tratamiento de los datos genéticos en relación con las siguientes cuestiones: a) el empleo de una persona, salvo en conformidad de las disposiciones de la sección 12A de la ley de protección de datos de 1988 (según lo insertado por enmienda en la ley de protección de los datos de 2003), b) una póliza de seguro o de los seguros de vida, c) una política de seguro de salud o relacionados con la salud, los seguros, d) un profesional de pensiones, un contrato de renta de jubilación o cualquier otra pensión, e) la hipoteca de la propiedad.

Nadie procesará datos genéticos a menos que se hayan tomado todas las medidas razonables para proveer del tema de los datos toda la información apropiada respecto a lo siguiente: a) al propósito y los posibles resultados del tratamiento, y b) las posibles consecuencias para la salud de los datos que pueden llegar a ser conocidos como resultado del proceso.

Quien contravenga la subsección (2) o (3) será culpable de un delito. Dicho delito en virtud de esta subsección será juzgado según lo establecido en la sección 31 de la ley de protección de los datos de 1988.

En cuanto a la información sobre los antecedentes familiares de un solicitante de seguros será tramitada de acuerdo con dichos reglamentos (si los hubiere) como se puede formular por el Ministro en la sección 2B(1)(b)(xi) de la ley de protección de datos de 1988 (según lo insertado por la enmienda a la ley de protección de datos de 2003).

Antes de realizar los reglamentos a que se refiere el párrafo (1) el Ministro consultará respecto a lo siguiente: a) en relación al proceso de datos relacionado con la salud o prima de salud de los seguros (con excepción de la salud o seguro relativo a la salud previo y que se regulase por las leyes del seguro médico de 1994 y 2003) con el Ministro de Salud e Infancia y el Comisionado de protección de datos, b) en relación con la tramitación relacionada con una pensión de jubilación, contrato de renta vitalicia o cualquier otro acuerdo de pensiones, con el Ministro de Asuntos Sociales y de la Familia y el Comisionado de protección de datos, c) en relación al proceso conectado con políticas de seguros, o los seguros de vida (con excepción de las especificadas en el párrafo a), o una hipoteca, con la autoridad irlandesa reguladora de los servicios financieros y el Comisionado de protección de datos.

Antes de realizar los reglamentos a que se refiere el párrafo (1), el Ministro podrá consultar a las demás entidades o personas que considere conveniente.

El Ministro iniciará, no más tarde del 1 de enero 2014, una de revisión del funcionamiento de esta parte y se asegurará de que la revisión se lleve a cabo.

La persona que lleve a cabo una revisión en virtud de la subsección (1) deberá consultar con los demás ministros del Gobierno que considere apropiados, el Comisionado de protección de datos, la autoridad irlandesa reguladora de los

servicios financieros y las demás personas o entidades que considere apropiados.

Nada de lo dispuesto en la presente parte se interpretará en el sentido de que se autoriza al tratamiento de datos personales en contravención a las disposiciones de las leyes de protección de datos de 1988 y 2003.

Nada de lo dispuesto en la presente parte se interpretará en el sentido de que se prohíbe la adopción y utilización de acuerdo con la ley de muestras corporales con el fin de las pruebas o análisis forense en relación con la investigación de un delito, o para cualquier otro fin no prohibido por la ley, por o en nombre de la Garda Si' ocha' na o por el tratamiento de los datos genéticos (si lo hubiere) derivados de tales pruebas o análisis.

Number 14 of 2005

DISABILITY ACT 2005

ARRANGEMENT OF SECTIONS

PART 1

Preliminary and General Section

1. Short title and commencement.
2. Interpretation.
3. Orders and regulations.
4. Expenses.
5. Provision of resources and extent of provision.
6. Review of operation of Act.

(...)

PART 4

Genetic Testing Section

41. Interpretation (*Part 4*).
42. Genetic testing and processing of genetic data.
43. Family history information.
44. Review of operation of this Part.
45. Saver.

(...)

Number 14 of 2005

DISABILITY ACT 2005

AN ACT TO ENABLE PROVISION TO BE MADE FOR THE ASSESSMENT OF HEALTH AND EDUCATION NEEDS OCCASIONED TO PERSONS WITH DISABILITIES BY THEIR DISABILITIES, TO ENABLE MINISTERS OF THE GOVERNMENT TO MAKE PROVISION, CONSISTENT WITH THE RESOURCES AVAILABLE TO THEM AND THEIR OBLIGATIONS IN RELATION TO THEIR ALLOCATION, FOR SERVICES TO MEET THOSE NEEDS, TO PROVIDE FOR THE PREPARATION OF PLANS BY THE APPROPRIATE MINISTERS OF THE GOVERNMENT IN RELATION TO THE PROVISION OF CERTAIN OF THOSE, AND CERTAIN OTHER SERVICES, TO PROVIDE FOR APPEALS BY THOSE PERSONS IN RELATION TO THE NON-PROVISION OF THOSE SERVICES, TO MAKE FURTHER AND BETTER PROVISION IN RESPECT OF THE USE BY THOSE PERSONS OF PUBLIC BUILDINGS AND THEIR EMPLOYMENT IN THE PUBLIC SERVICE AND THEREBY TO FACILITATE GENERALLY ACCESS BY SUCH PERSONS TO CERTAIN SUCH SERVICES AND

EMPLOYMENT AND TO PROMOTE EQUALITY AND SOCIAL INCLUSION AND TO PROVIDE FOR RELATED MATTERS.

[8th July, 2005]

BE IT ENACTED BY THE OIREACHTAS AS FOLLOWS:

PART 1

Preliminary and General

1.—(1) This Act may be cited as the Disability Act 2005.

(2) Subject to *subsection (3)*, this Act shall, except in relation to a provision whose commencement is otherwise provided for by this Act, come into operation on such day or days as, by order or orders made by the Minister, may be fixed therefor either generally or with reference to any particular purpose or provision, and different days may be so fixed for different purposes and different provisions. 5 Short title and commencement. Pt.1 S.1 Interpretation. 6 [No. 14.] *Disability Act 2005*. [2005.]

(3) *Part 2* shall come into operation on such day or days as, by order or orders made by the Minister for Health and Children, where appropriate, after consultation with the Minister for Education and Science, may be fixed therefor either generally or with reference to persons of different ages or with reference to any other particular purpose or provision and different days may be so fixed for persons of different ages, for other different purposes or for different provisions.

2.—(1) In this Act, except where the context otherwise requires—

“Act of 1999” means the National Disability Authority Act 1999;

“Defence Forces” has the meaning assigned to it by the Defence Act 1954;

“disability”, in relation to a person, means a substantial restriction in the capacity of the person to carry on a profession, business or occupation in the State or to participate in social or cultural life in the State by reason of an enduring physical, sensory, mental health or intellectual impairment;

“Executive” means the Health Service Executive;

“functions” includes powers and duties and references to the performance of functions include, with respect to powers and duties, references to the exercise of the powers and the carrying out of the duties;

“head” in relation to a public body means, the person who holds, or performs the functions of the office of the chief executive officer (by whatever name called) of the body;

“local authority” has the meaning assigned to it by the Local Government Act 2001;

“Minister” means the Minister for Justice, Equality and Law Reform;

“passenger transport service” does not include an air service within the meaning of the Air Navigation and Transport Act 1965 or a service provided by a person who only operates a train service or railway infrastructure of historic or touristic interest;

“public body” means—

- (a) a Department of State,
- (b) the Office of the President,
- (c) the Office of the Attorney General,
- (d) the Office of the Comptroller and Auditor General,
- (e) the Office of the Houses of the Oireachtas,
- (f) a local authority,
- (g) the Executive,

(h) a person, body or organisation (other than the Defence Forces) established— [2005.] [*Disability Act 2005. No. 14.*]

(i) by or under any enactment (other than the Companies Acts 1963 to 2003), or

(ii) under the Companies Acts 1963 to 2003, in pursuance of powers conferred by or under another enactment, and financed wholly or partly, whether directly or indirectly, by means of moneys provided, or loans made or guaranteed, by a Minister of the Government or shares held by or on behalf of a Minister of the Government;

“service” means a service or facility of any kind provided by a public body which is available to or accessible by the public generally or a section of the public and, without prejudice to the generality of the foregoing, includes—

(a) the use of any place or amenity owned, managed or controlled by a public body,

(b) the provision of information or an information resource or a scheme or an allowance or other benefit administered by a public body,

(c) any cultural or heritage services provided by such a body, and

(d) any service provided by a court or other tribunal.

(2) In this Act—

(a) a reference to a Part, section or Schedule is a reference to a Part or section of, or a Schedule to this Act, unless it is indicated that a reference to some other provision is intended,

(b) a reference to a subsection, paragraph or subparagraph is a reference to the subsection, paragraph or subparagraph of the provision in which the reference occurs unless it is indicated that a reference to some other provision is intended,

(c) a reference to any enactment or instrument made under statute is a reference to that enactment or instrument as amended, adapted or extended at any time by any enactment or instrument made under statute.

3.—(1) The Minister may, with the consent of the Minister for Finance—

(a) by regulations provide, subject to the provisions of this Act, for any matter referred to in *Part 2* as prescribed or to be prescribed, and

(b) in addition to any other power conferred on him or her to make regulations, make regulations generally for the purposes of, and for the purpose of giving full effect to, *Part 2*.

(2) Where the Minister proposes to make regulations under this section, he or she shall, before doing so, consult with such other (if 7 Pt.1 S.2 Orders and regulations. Pt.1 S.3 Expenses. Provision of resources and extent of provision. 8 [No. 14.] *Disability Act 2005*. [2005.] any) Minister of the Government as the Minister considers appropriate having regard to the functions of that other Minister of the Government.

(3) An order or regulation under this Act (other than an order under *section 1*) may contain such incidental, supplementary and consequential provisions as appear to the Minister of the Government concerned to be necessary or expedient for the purposes of the order or regulation.

(4) Every order (other than an order under *section 1*) or regulation under this Act shall be laid before each House of the Oireachtas as soon as may be after it is made and, if a resolution annulling the order or regulation is passed by either such House within the next 21 days on which that House has sat after the order or regulation is laid before it, the order or regulation shall be annulled accordingly but without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

(5) A Minister of the Government by whom an order under this Act is made may by order amend or revoke the order.

(6) In this section “Minister” means the Minister for Health and Children.

4.—(1) The expenses incurred by a Minister of the Government (other than the Minister for Finance) in the administration of this Act shall, to such extent as may be sanctioned by the Minister for Finance, be paid out of moneys provided by the Oireachtas.

(2) The expenses incurred by the Minister for Finance in the administration of this Act shall be paid out of moneys provided by the Oireachtas.

5.—(1) In this section—

“Minister” means a Minister of the Government;

“relevant public body”, in relation to a Minister, means a public body which provides services under this Act in relation to which that Minister allocates moneys;

“service plan”, in relation to a specified body, means a service plan or other similar document approved by the Minister to whom that body is required by an enactment to submit such a plan or document;

“specified body” means the Executive or any other public body which is not the subject of an allocation by a Minister under *subsection (2)*.

(2) Where, in the financial year 2005 or any subsequent such year, a Minister or a relevant public body in relation to that Minister provides or arranges for the provision of services under this Act, that Minister shall, subject to *subsections (4) and (5)*, allocate out of the moneys available to him or her for that year such amount as he or she considers appropriate for the provision of those services.

(3) Where, in the financial year 2005 or any subsequent such year, a specified body provides or arranges for the provision of services under this Act, that body shall, subject to *subsections*

(4) and (5), [2005.] [*Disability Act 2005. No. 14.*] allocate out of the moneys available to it for that year such amount as it considers appropriate for the provision of those services.

(4) In determining the appropriate allocation under *subsection (2) or (3)* in a financial year, the Minister or specified body concerned shall ensure that the amount remaining after the allocation is not less than the amount that is appropriate, having regard, *inter alia*, to—

(a) the extent of the Minister's or the specified body's other obligations in that year, and

(b) in the case of a specified body, its service plan for that year, for the performance of the functions conferred on the Minister or the specified body other than by this Act.

(5) If satisfied that the amount of the moneys allocated under *subsection (2) or (3)* in a financial year is the maximum amount permitted by this section to be so allocated—

(a) the Minister or specified body concerned, as the case may be, shall not be required to allocate, and nothing in this Act shall be construed as requiring the allocation of, additional moneys under *subsection (2) or (3)* for that year, and

(b) the Minister or a relevant public body in relation to the Minister or a specified body, as the case may be, shall not be required to provide, and nothing in this Act shall be construed as requiring the provision by or on behalf of the Minister, the relevant public body or the specified body of, services under this Act in that year the cost of the provision of which could not be met out of the moneys allocated under *subsection (2) or (3)*.

6.—The Minister shall, not later than 5 years after the commencement of this Act, carry out a review of the operation of this Act.

(...)

PART 4

Genetic Testing

41.—In this Part—

“the Acts” means the Data Protection Acts 1988 and 2003;

“genetic data” means data relating to a living person derived from genetic testing of the person;

“genetic testing” means the examination of samples taken from a living person for the purpose of analysing the person’s deoxyribonucleic or ribonucleic acid by means of chromosomal analysis or by any other means for the purpose of—

(a) confirming the identity or nature of an existing symptomatic disease,

(b) ascertaining whether the person has a genetic predisposition or susceptibility to a disease, or

(c) identifying the carrier of a disease;

“processing” has the meaning assigned to it by the Acts.

42.—(1) Genetic testing shall not be carried out on a person unless—

(a) the testing is not prohibited by law, and

(b) the consent of the person to the processing of any genetic data to be derived from the testing has been obtained in accordance with the Acts.

(2) A person shall not engage in the processing of genetic data in relation to—

(a) the employment of a person save in accordance with the provisions of section 12A of the Data Protection Act 1988 (as inserted by the Data Protection (Amendment) Act 2003),

(b) a policy of insurance or life assurance,

(c) a policy of health insurance or health-related insurance,

37 Pt.3 S.40 Interpretation (*Part 4*). Genetic testing and

processing of genetic data. Pt.4 S.42 Family history information. Review of operation of this Part. 38 [No. 14.] *Disability Act 2005*. [2005.]

(d) an occupational pension, a retirement annuity contract or any other pension arrangement,

(e) the mortgaging of property.

(3) A person shall not process genetic data unless all reasonable steps have been taken to provide the data subject with all appropriate information concerning—

(a) the purpose and possible outcomes of the proposed processing, and

(b) any potential implications for the health of the data subject which may become known as a result of the processing.

(4) A person who contravenes *subsection (2)* or *(3)* shall be guilty of an offence; an offence under this subsection shall be deemed to be an offence to which section 31 of the Data Protection Act 1988 applies.

43.—(1) Information about the family history of an applicant for insurance shall be processed in accordance with such regulations (if any) as may be made by the Minister under section 2B(1)(b)(xi) of the Data Protection Act 1988 (as inserted by the Data Protection (Amendment) Act 2003).

(2) Before making regulations referred to in *subsection (1)* the

Minister shall consult—

(a) in relation to processing connected with health or health-related insurance (other than health or health-related insurance provided for under the Health Insurance Acts 1994 and 2003) with the Minister for Health and Children and the Data Protection Commissioner,

(b) in relation to processing connected with an occupational pension, a retirement annuity contract or any other pension

arrangement, with the Minister for Social and Family Affairs and the Data Protection Commissioner,

(c) in relation to processing connected with policies of insurance, or life assurance (other than those specified in *paragraph (a)*), or a mortgage, with the Irish Financial Services Regulatory Authority and the Data Protection Commissioner.

(3) Before making regulations referred to in *subsection (1)* the Minister may consult with such other bodies or persons as he or she thinks fit.

44.—(1) The Minister shall initiate, not later than 1 January 2014, a review of the operation of this Part and shall ensure that the review is carried out.

(2) The person carrying out a review under *subsection (1)* shall consult with such other Ministers of the Government as he or she considers appropriate, the Data Protection Commissioner, the Irish Financial Services Regulatory Authority and such other persons or bodies as he or she considers appropriate. [2005.] [*Disability Act 2005. No. 14.*]

45.—(1) Nothing in this Part shall be construed as authorising the processing of personal data contrary to the provisions of the Data Protection Acts 1988 and 2003.

(2) Nothing in this Part shall be construed as prohibiting the taking and use in accordance with law of bodily samples for the purpose of forensic testing or analysis in connection with the investigation of an offence, or for any other purpose not prohibited by law, by or on behalf of the Garda Síochána or the processing by them of genetic data (if any) derived from such testing or analysis.